

Panamá, miércoles 7 de mayo de 2008

Valor agregado La misión principal del Estado

1021937JUAN CARLOS CACHANOSKY
negocios@prensa.com

OPINIÓN. El gasto público es útil para las personas que viven en una sociedad en la que se devuelven un servicio que mejore su calidad de vida. Cada persona debería poder actuar en libertad con la única restricción de que no viole los derechos de otras personas. La misión más importante del Estado es velar porque esto se cumpla. O sea que ninguna persona gane a costa de las demás.

El principio de oro es que: nadie debe hacer a través del Estado lo que no puede hacer en forma directa. O puesto de otra manera, nadie puede darle derechos al Estado que él mismo no tiene. Por ejemplo si no puedo asesinar, ni tengo el derecho a hacerlo, no puedo pedirle al Estado que asesine por mí. No podemos ceder al Estado derechos que no tenemos. Si un grupo de empresarios contrata a un grupo de gente armada para que impida por la fuerza que otras personas compren a sus competidores se estaría cometiendo un acto de violencia. Ahora, si los mismos empresarios piden al Gobierno que pase una ley otorgándoles un monopolio, esto se considera "legal" simplemente porque intervino el Gobierno.

Pero en realidad lo que se está haciendo es usar al Estado para hacer a través de él, lo que no se puede hacer en forma directa. El Estado en vez de impartir justicia usa la fuerza de la ley y la policía para que unos ganen a costa de otros. Lo mismo se puede decir de los subsidios. Nadie puede a punta de revolver quitarle dinero a otro para su propio beneficio. Esto es robo, pero si se usa el Estado para que cobre impuestos a unos para darles a otro se convierte en acto "legal".

En rigor, esto es un robo legalizado. Se usa al Estado para hacer lo que no se puede hacer en forma directa. Si un grupo de trabajadores contrata a un grupo de gente armada para que espere a otros trabajadores el día de pago y les quiten una parte de sus salarios claramente se vería esto como un robo. Pero si el mismo grupo de trabajadores forma un sindicato y el Gobierno aprueba una ley para que se retenga a los trabajadores un porcentaje de sus ingresos y se depositen en la cuenta bancaria del sindicato entonces esto se vuelve legal. Cuando el Estado deja de impartir justicia para todos y toma parte con su poder de policía a favor de unos grupos y en contra de otros entonces se estará en una sociedad injusta donde las elecciones consisten en ver qué grupo va a ser el encargado de robar.

Esta posición del Estado tiene efectos económicos perjudiciales para las inversiones y las personas que en vez de verse protegidas por el Gobierno se ven amenazadas. En especial, cuando el grupo beneficiado es el que está en el poder y cobra impuestos crecientes en su propio beneficio. Esta es una tendencia que se observa en todos los países del mundo desde comienzos del siglo XX.

El autor es economista.